

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



*“Al servicio de la justicia y de la paz social”*

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	DIVISORIO
DEMANDANTE	BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADOS	IVÁN DARÍO DEOSSA CORREA
OPOSITOR	LUIS MARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO
RADICADO	05266 31 03 002 2019 00014 01
PROVIDENCIA	INTERNO 2023 – 039
TEMAS	AUTO INTERLOCUTORIO N° 061
DECISIÓN	NULIDADES PROCESALES, OPORTUNIDAD PARA
MAGISTRADA	FORMULARLAS.
PONENTE	CONFIRMA
	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

**Medellín, tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023).**

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Mario González Muñoz, frente al auto proferido el día 14 de febrero de 2023, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, mediante el cual resolvió negativamente la alegación de nulidad formulada por el aquí recurrente.

**I. ANTECEDENTES**

En el presente proceso ejecutivo donde Bancolombia demandó al señor Iván Darío DeOssa Correa, el señor Luis Mario González Muñoz, quien presentó oposición a la diligencia de secuestro, alegando su calidad de comprador del inmueble ubicado en la Calle 39 D Sur N° 24 EE 146 Edificio Verdun apto 1008, identificado con matrícula inmobiliaria N°001-1248613 y parqueaderos 103 y 104, presentó alegación de nulidad argumentando la existencia de una nulidad constitucional por afectación del debido proceso, buscando que se declare la nulidad de lo actuado a partir de la decisión proferida el día 2 de

junio de 2022, providencia ésta última mediante la cual se allegó el despacho comisorio N°048 de 30 de septiembre de 2021 donde se inició la diligencia y se remitió con ocasión de la oposición presentada por el apoderado judicial del señor González Muñoz, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 596 y 309 del C.G.P. y se indicó por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado que como la oposición se presentó en la diligencia y ante el comisionado, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de ese auto, las partes y el opositor podrían solicitar las pruebas relacionadas con la oposición y se le indicó además al opositor que debía prestar caución por valor de \$10.000.000 en el término de 5 días conforme a lo requerido en el parágrafo del artículo 309 del C.G.P., so pena de que la oposición no fuera atendida (Archivo digital 47/Carpeta expediente 05266 31 03 002 2020 00064/Contenida en la Carpeta 01.Primer Instancia del expediente).

La alegación de nulidad se sustentó en que el recurrente se opuso a la diligencia de secuestro por medio de apoderado, estando ambos presentes al momento de la diligencia en la que la comisionada devolvió la comisión a la autoridad judicial comitente para que resolviera sobre la oposición, que dada su calidad de opositor podía presentar las pruebas adicionales que considerara y que en este evento, como la oposición se realizó desde la diligencia misma, no había lugar a fijar caución, pues esa carga sólo está prevista para el opositor que no acude a la diligencia conforme a lo previsto en el artículo 309 del C.G.P., o para aquél que en la misma no estuvo representado por apoderado.

Relatando que en este caso al habersele exigido la caución, se configura una nulidad de carácter constitucional, ya que a pesar que las causales de nulidad son las que se enuncian en el artículo 133 del C.G.P., en el evento de “violación al debido proceso”, como ocurre en el *sub lite* donde se vulneró el derecho de defensa, *“se deja abierta la puerta para que, según el caso, el afectado invoque la presencia de una nulidad de rango Constitucional, de cara al artículo 29 de la Carta Magna, a consecuencia de que el Juez no tenga en cuenta el “debido proceso” o se aparte de la “observancia de la*

*plenitud de las formas propias del cada juicio”*”, y en este caso concreto, dice, a su poderdante se le vulneró el derecho de defensa.

Aduce que, exigir la caución cuando no es procedente, de conformidad con el contenido del artículo 309 del C.G.P., vulnera el derecho de defensa del opositor configurándose una causal de nulidad insaneable, no siendo posible afirmar que la nulidad se sana por haber actuado con posterioridad sin proponerla, porque ello sólo ocurre en los casos en que no se haya violado el derecho defensa como núcleo del debido proceso.

Mediante auto de 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado corrió traslado a las partes por el término de 3 días, de conformidad con el artículo 134 del C.G.P. de la alegación de nulidad presentada (Archivo digital 64/Carpeta expediente 05266 31 03 002 2020 00064/Contenida en la Carpeta 01.Primer Instancia del expediente), oportunidad que fue aprovechada por el apoderado judicial de Servicios Generales Suramericana S.A. (Acreedor Hipotecario), oponiéndose a la prosperidad de la alegación de nulidad (Archivo digital 65/Carpeta expediente 05266 31 03 002 2020 00064/Contenida en la Carpeta 01.Primer Instancia del expediente).

En auto del 14 de febrero de 2023, el juzgado de primera instancia negó la alegación de nulidad argumentando que la misma no está fundamentada en una de las causales específicas de nulidad las cuales son taxativas, además de ser claro que en el curso de la tramitación se ha respetado en todo momento al señor Luis Mario González Muñoz el derecho al debido proceso, advirtiéndolo el juzgado que incluso ello se advierte en el hecho de decidir la alegación de nulidad a pesar de contar con la posibilidad de rechazarla de plano, empero que se introdujo en el fondo del asunto para definir que no se encuentra vulneración al derecho al debido proceso, a lo que agrega que la nulidad se propuso de manera inoportuna por cuanto el opositor ha actuado en múltiples oportunidades después de acaecida la causal de nulidad. (Archivo digital 66/Carpeta expediente 05266 31 03 002 2020 00064/Contenida en la Carpeta 01.Primer Instancia del expediente).

## II. LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión así proferida, formuló el reclamante de la nulidad recurso de apelación, reiterando que el señor Luis Mario González Muñoz estuvo presente en la diligencia de secuestro, evento ante el cual su situación procesal no sería la contemplada en el parágrafo del artículo 309, que erróneamente aplicó el despacho; sino la del numeral 2° de la referida norma, (poseedor presente en la diligencia), y que en dicha disposición por ninguna parte se instituye la prestación de caución alguna; de manera que resulta un error del juzgado la exigencia de ésta, lo cual constituye una indebida aplicación del rito procesal y esta circunstancia permite la posibilidad de alegar la nulidad procesal por violación al debido proceso.

Refiere que si bien el artículo 133 del C.G.P. no consagra específicamente el evento de la violación al debido proceso, ello obedece a ***“...que se deja abierta la puerta para que, según el caso, el afectado invoque la presencia de una nulidad de rango Constitucional, de cara al artículo 29 de la Carta Magna, a consecuencia de que el Juez no tenga en cuenta el “debido proceso” o se aparte de la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*”**.

Con fundamento en lo anterior, pide que se revoque la providencia apelada y, en su lugar, se declare la nulidad de lo actuado, a partir del auto vertido el día 2 de junio del año 2.022, y se retrotraiga lo así decidido a la ritualidad de que se decida la oposición, sin la prestación de caución alguna (Archivo digital 68/Carpeta expediente 05266 31 03 002 2020 00064/Contenida en la Carpeta 01.Primer Instancia del expediente).

Concedida la alzada en el efecto devolutivo ante esta Corporación, se procede a resolver de plano conforme lo mandan el artículo 90 y el inciso segundo del artículo 326 del Código General del Proceso, previas las siguientes:

### III. CONSIDERACIONES

#### 1. LAS NULIDADES PROCESALES.

Ha sostenido la doctrina que la nulidad es una sanción procesal que priva a los actos y a las etapas procedimentales de sus efectos normales desde su eficacia, en atención a la inobservancia de ciertas reglas fundamentales del postulado del debido proceso, como las referentes a las formas, la garantía de contradicción y las pautas propias del principio de Juez natural.

El Código General del Proceso, en su capítulo II, título IV, del libro 2º, regula lo atinente a las nulidades que pueden invalidar total o parcialmente el proceso, régimen que entre otros, se encuentra sometido al principio de taxatividad o especificidad, según el cual sólo constituyen causales de nulidad los asuntos previstos como tales en el ordenamiento procesal, de donde se concluye que el legislador, luego de precisar en el inciso 1º del artículo 133 de la obra en cita, que el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los 8 casos que allí se enlistan, termina diciendo en el único párrafo con que cuenta dicha norma, que *“las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”*.

En cuanto a la oportunidad para alegar las nulidades, indica el artículo 134 del Código General del Proceso que se podrá hacer en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a ésta, si ocurrieren en ella. Y sobre los requisitos para alegar la nulidad el artículo 135 ibídem establece en lo pertinente, que *“No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”*.

De modo pues que la posibilidad de alegar o proponer una nulidad está condicionada a los requisitos claramente consignados en el artículo 135 del Código General del Proceso, a cuyo tenor:

La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, **expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta**, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento sólo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este Capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación (Resaltado intencional).

## **2. CASO CONCRETO.**

En el presente caso, la discusión radica en la decisión negativa que frente a la alegación de nulidad formulada por el aquí recurrente profirió el juez de primera instancia, insistiéndose a través del recurso de apelación que se incurrió en una causal de nulidad constitucional al haberse exigido al señor Luis Mario prestar una caución para darle curso a la oposición que presentó frente a la diligencia de secuestro, indicándose que con ello se inobservó el rito en la medida en que como el opositor estuvo en la diligencia de secuestro y allí formuló la oposición, del contenido del artículo 309 del C.G.P., norma aplicable al asunto, se advierte que no resultaba procedente la exigencia y al apartarse el juzgado de la ritualidad, le vulneró el derecho al debido proceso, argumentos éstos en los que funda la alegación de nulidad constitucional.

De forma reiterada refiere el recurrente que la nulidad alegada es constitucional, pero la lectura de su solicitud evidencia que sus argumentos no los enmarca, ni tampoco es posible adecuarlos en algunas de las causales establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso, como tampoco en la excepcional causal establecida en el artículo 29 de la Constitución por obtención de la prueba con violación del debido proceso, lo que implicaba, el rechazo de plano de la alegación, como incluso, pese a haber decidido de fondo, lo insinuó el juez de primer grado en la providencia recurrida.

Es cierto que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso debe regir todas las actuaciones judiciales y administrativas, pero ello implica que precisamente las partes en un proceso judicial utilicen los mecanismos procesalmente establecidos para la defensa adecuada de sus derechos y, en este caso, contrario a lo aducido por el apelante, la alegación de nulidad no era el mecanismo adecuado, porque el opositor ahora recurrente, tuvo la posibilidad de formular recurso de reposición contra el auto de 2 de junio de 2022, mediante el cual se allegó a la tramitación el despacho comisorio, providencia en la que se le fijó la caución o de exponer defensas encaminadas a atacar el mismo, pero de forma negligente permitió que dicha providencia alcanzara ejecutoria sin ejercer recursos, pretendiendo ahora sin justificación alguna corregir su falta de diligencia mediante una nulidad improcedente.

Es verdad también que el artículo 29 de la Constitución Política extiende las causales de nulidad para eventos de obtención de pruebas con violación del debido proceso y, también es utilizada dicha norma como sustento para adecuar actuaciones judiciales que vulneran flagrantemente el debido proceso al interior de un trámite judicial y que no tienen consagrado un remedio procesal, pero ese no es el caso que aquí se presenta, porque, se insiste, la parte ahora recurrente tuvo a su alcance recursos idóneos para corregir las irregularidades que aduce existieron en las actuaciones de primera instancia y sin justificación alguna dejó de usarlos.

Sobre el tópico de la taxatividad de las nulidades, la excepcional nulidad constitucional por obtención de pruebas con violación del debido proceso y lo inadecuado de declarar nulidades por causales no establecidas por el legislador y por asuntos no discutidos mediante los recursos procedentes, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-125 de 2010 donde esa Corporación explicó:

*“Nuestro sistema procesal, como se deduce del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales de nulidad. **La taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente,***

por la Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso[25]. Cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad. En este sentido, la Corte expresó lo siguiente en la sentencia C-491 de 1995:

*“El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los recursos.”*

*Esta Corte ha estimado que un sistema restringido –taxativo- de nulidades se ajusta a la Constitución, por cuanto garantiza los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal. En este sentido, en la sentencia C-491 de 1995[26], la Corporación sostuvo que pese a que el artículo 29 superior establece los fundamentos básicos del derecho al debido proceso, corresponde al legislador, dentro de su facultad discrecional y con arreglo a los principios constitucionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas las formas procesales que deben ser cumplidas para asegurar su vigencia. En tal virtud, la regulación del régimen de nulidades es un asunto que atañe en principio al legislador, el cual puede señalar, de conformidad con el principio de la proporcionalidad y los demás principios constitucionales, las causales de nulidad.*

*El legislador –continúa la Corte- eligió un sistema de causales taxativas de nulidad con el fin de preservar los principios de seguridad jurídica y celeridad en los procesos judiciales. En efecto, este sistema permite presumir, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a una de las causales específicamente previstas en la ley. “(...) De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas.”*



*La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso. Es por ello que en reiteradas oportunidades tanto esta Corte, como el Consejo de Estado han revocado autos que declaran nulidades con fundamento en causales no previstas expresamente por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 29 de la Constitución” (Resaltado intencional).*

De modo pues que nuestro máximo órgano de decisión constitucional ha propendido por la defensa de la taxatividad en materia de nulidades y por ello ha rechazado la declaratoria de nulidades que no están enmarcadas en los casos específicos consagrados por el legislador, ni en el caso más excepcional aún consagrado en el artículo 29 de la Constitución y, que se fundan en asuntos que debieron ser corregidos mediante el uso de recursos al interior del proceso.

Los anteriores argumentos, sin necesidad de realizar mayores elucubraciones, son suficientes para despachar desfavorablemente las inconformidades del recurrente y en consecuencia confirmar la providencia de primer grado, porque en últimas desestimó la alegación de nulidad, aunque lo procedente aquí era rechazar de plano la alegación.

### **3. COLOFÓN Y COSTAS.**

En consecuencia, como la irregularidad aducida no se enmarca en algunas de las causales de nulidad establecidas en la legislación procesal civil, como tampoco en la excepcional nulidad por obtención de prueba con violación del debido proceso y se trataba de un asunto que debió ser discutido mediante recursos, lo que no hizo el petente, se concluye que procedía el rechazo de plano de la alegación que en últimas se hizo despachando negativamente la misma y, por ende, la CONFIRMACIÓN en esta instancia del auto apelado.

No obstante, la resolución de la instancia ser negativa para la parte recurrente, no habrá lugar a imponer condena en costas en esta instancia,

toda vez que no se causaron. Lo anterior atendiendo la regla 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

**IV. RESUELVE**

**PRIMERO. CONFIRMAR** el auto de fecha 14 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, mediante el cual en últimas se despachó negativamente la alegación de nulidad formulada por el señor Luis Mario González Muñoz.

**SEGUNDO. ABSTENERSE** de imponer condena en costas.

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

**Magistrada**

***(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)***

Firmado Por:

**Martha Cecilia Ospina Patiño**

**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**

**Sala 007 Civil**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8d48f25d83147818b55b2f160e382e15a6832d1a76a83792ff38479ee8e3bc44**

Documento generado en 03/05/2023 04:51:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>